



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Demandantes: LUZ EUGENIA MONTOYA SANTAMARÍA Y OTRAS
Demandados: PORFIRIO DE JESÚS ORTEGA ARROYAVE, OMAIRA PÉREZ
AGUDELO Y COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 019 2015 001328 01
Sentencia: S-146

AUTO

En atención a la escritura pública 3374 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERÍA S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. MARICEL LONDOÑO RICARDO, T.P. 191.351 del C. S. de la Judicatura. Y se accede a la sustitución de poder presentada por la referida apoderada, a favor del Dr. JUAN GABRIEL TORO TORO portador de la T.P. N° 292.949 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que la apoderada principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO

ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ procede a dar trámite al grado jurisdiccional de **CONSULTA** concedido a favor de las demandantes, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 12 de julio de 2022.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

LUZ EUGENIA MONTOYA SANTAMARÍA, MABEL ANDREA GÓMEZ MONTOYA, LUZ ADRIANA GÓMEZ MONTOYA, y ANA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, demandaron a los señores PORFIRIO DE JESÚS ORTEGA ARROYAVE y OMAIRA PÉREZ AGUDELO, para que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido que estos celebraron con el Sr. RAMÓN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, desde el 2 de enero de 1996 hasta el 16 de marzo de 2011, fecha en que el trabajador falleció con ocasión de un accidente de trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, pretenden que sean condenados a pagar individual, conjunta o solidariamente los conceptos de: salarios, auxilio de transporte, recargos por horas extras, dominicales y festivas laboradas, prestaciones sociales como son la prima, cesantía e intereses a la cesantía, compensación en dinero de las vacaciones, compensación en dinero de la dotación de calzado y vestido de labor, sanción por la no consignación de la cesantía en un fondo, sanción por el no pago de los intereses a la cesantía, sanción por el no pago de salarios y prestaciones sociales, intereses moratorios o indexación, y en razón a la omisión del deber de afiliación al sistema de la seguridad social en pensiones, le reconozcan, paguen y trasladen a COLPENSIONES, el valor correspondiente al cálculo actuarial o título

pensional por la no afiliación correspondiente por los períodos del 2 de enero de 1996 al 16 de marzo de 2011.

De igual forma, demandaron a COLPENSIONES para que esta entidad realice las acciones de cobro en contra de los codemandados, tendientes a recaudar el título o bono pensional con sus intereses, y se les reconozca y pague la pensión de sobrevivientes, mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación, por la muerte del señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ.

LOS HECHOS:

Exponen como fundamentos de sus peticiones, que el 2 de enero de 1996 el señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ fue vinculado laboralmente en el municipio de Amagá, sector La Cancha, Vereda La Ferrería, por los demandados para laborar en la mina denominada "La Comuna", mediante acuerdo verbal de trabajo, en el cargo de minero de socavón para la extracción de carbón, recibiendo como último salario la suma de \$1'920.000; que el horario del señor GÓMEZ PÉREZ era de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 2:00 a.m. a 10:00 a.m., bajo continua subordinación, efectuado hasta el 16 de marzo de 2011, fecha en la que falleció mientras laboraba en su lugar de trabajo; que esta labor fue desarrollada desde el 2 de enero de 1996 hasta el 16 de marzo de 2011, lo cual puede ser corroborado con la declaración juramentada realizada por el causante el día 6 de noviembre de 2010; que la muerte ocurrió por una descarga eléctrica mientras laboraba en la mina; que los demandados nunca le cancelaron al causante las prestaciones sociales, dotación de calzado y vestido de labor, como tampoco efectuaron la afiliación a la seguridad social; y que realizó la reclamación de la pensión de sobrevivientes a COLPENSIONES, sin obtener respuesta alguna.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El curador Ad Litem de los señores PORFIRIO DE JESÚS ORTEGA ARROYAVE y OMAIRA PÉREZ AGUDELO, contestó la demanda manifestando frente a los hechos que no le consta la relación laboral que alega la parte actora, como tampoco que exista una remuneración ni el cargo ejercido, hechos que deberán probarse; no le consta el horario, ni que el señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ fuera compañero de la demandante; que una declaración juramentada no puede ser concluyente para indicar que existió una relación laboral, por lo que deberá probarse los elementos esenciales del contrato de trabajo; que no le consta ni hay documento que señalen que existió un accidente de trabajo. Niega las causas de la muerte como lo indica el informe forense, pero el hecho que un tercero indique el término "laboraba" no implica que sea determinante para declarar la relación laboral; que tampoco le constan las obligaciones que se hubiesen causado dentro de una relación laboral, la cual primero debe ser probada; no le consta que sus hijas y la demandante sean beneficiarias de la pensión de sobrevivientes. Se opuso a las pretensiones, pues no se ha demostrado la existencia de la relación laboral. Como excepciones propuso cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación y prescripción.

Por su parte, COLPENSIONES señaló que no le constan ninguno de los hechos, dado que son ajenos a la entidad, por lo que deberán ser probados. A las pretensiones, se atiene a lo probado con respecto a la relación laboral invocada, y frente los intereses moratorios y costas procesales se opone, ya que debería ser el empleador quien asuma dicha mora, pues no fue la entidad la que presentó la omisión. Como excepciones planteó la buena fe e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 12 de julio de 2022, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín **ABSOLVIÓ** a los demandados, así como a COLPENSIONES, de las pretensiones incoadas en su contra por

las demandantes; **DECLARÓ** probada la excepción denominada de inexistencia de la obligación; y se abstuvo de imponer condena en costas.

Se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de las demandantes, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Se advierte que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término del traslado para alegar concedido a las partes, el apoderado del COLPENSIONES señaló que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que no se cumplen con los requisitos para acceder al beneficio pensional solicitado.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Como viene de verse, las señoras LUZ EUGENIA MONTOYA SANTAMARÍA, MABEL ANDREA GÓMEZ MONTOYA, LUZ ADRIANA GÓMEZ MONTOYA, y ANA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, pretenden que se declare que el señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, ya fallecido, sostuvo una relación laboral regida por un contrato de trabajo entre el 2 de enero de 1996 y el 16 de marzo de 2011, con los señores PORFIRIO DE JESÚS ORTEGA ARROYAVE y OMAIRA PÉREZ AGUDELO; y que, como consecuencia, se le cancelen todas las acreencias laborales planteadas en el líbelo inicial que debió recibir en vida el señor GÓMEZ PÉREZ, junto con las sanciones moratorias por el no pago de las mismas y la omisión en la afiliación a la seguridad social.

Asimismo, demandan a COLPENSIONES para que les reconozca y pague la pensión de sobrevivientes con los intereses moratorios e indexación, por el fallecimiento del señor GÓMEZ PÉREZ, al ser beneficiarias del causante.

Lo primero por advertir, es que las siguientes situaciones no ofrecen discusión alguna a esta altura del proceso: i) que el señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ falleció el 17 de marzo de 2011, tal y como lo comprueba el registro civil de defunción¹; y ii) que las demandantes LUZ ADRIANA GÓMEZ MONTOYA², MABEL ANDREA GÓMEZ MONTOYA³ y ANA MARÍA GÓMEZ MONTOYA⁴, son hijas del señor GÓMEZ PÉREZ, como lo comprueban los registros civiles de nacimiento.

Como primer tema objeto de análisis, se abordará la existencia o no de la **Relación laboral** que habría ejecutado el señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ con los codemandados PORFIRIO DE JESÚS ORTEGA ARROYAVE y OMAIRA PÉREZ AGUDELO.

Para resolver esta pretensión y sus peticiones consecuenciales, es necesario recordar que en el proceso judicial corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que fundamentan sus pretensiones, o sus excepciones, según sea el caso, de acuerdo con los lineamientos normativos que en materia procesal gobiernan el debate probatorio, esto es, el artículo 167 del Código General del Proceso que dispone: *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”* o bien el 1757 del Código Civil según el cual *“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”*.

Los postulados anteriores aplicados a un proceso ordinario laboral van de la mano con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que para que exista contrato de trabajo se requiere que concurren tres elementos esenciales: a) la actividad personal del trabajador, esto es, realizada por sí mismo, b) la continuada

1 Folio 19 de la demanda

2 Folio 17 de la demanda

3 Folio 15 de la demanda

4 Folio 13 de la demanda

dependencia o subordinación del trabajador con respecto al empleador, y c) un salario como retribución del servicio.

El segundo de los elementos enunciados, esto es, la continuada dependencia o subordinación, es el que determina la diferencia entre el contrato de trabajo y otras formas de contratación jurídica, en las cuales, por darse una relación igualitaria o no subordinada entre los sujetos de la relación contractual, no se causan, como en aquél, prestaciones sociales.

Sin embargo, existe una presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual señala que “... *toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo*”, no obstante, esta presunción es de carácter legal y se interpreta de la siguiente manera: cuando el trabajador aduce que estuvo vinculada por un contrato de trabajo, le compete demostrar solo la prestación personal del servicio, y de inmediato se presume la subordinación jurídica; empero el supuesto empleador puede derruir tal presunción probando que la misma no se dio porque se trató de una relación jurídica distinta a la laboral, esto es, autónoma o no subordinada .

Ahora. En el caso bajo examen, para demostrar la existencia del contrato de trabajo con los supuestos empleadores PORFIRIO DE JESÚS ORTEGA ARROYAVE y OMAIRA PÉREZ AGUDELO, las demandantes se valieron de la prueba documental y de los testimonios de los señores FRANCISCO JAVIER ARREDONDO MONTOYA y ROQUE ANTONIO SERNA BEDOYA, que, a juicio de esta Sala, no lograron probar con suficiencia, ni siquiera la prestación personal del servicio, llegándose a la misma conclusión del juez de primera instancia, por las siguientes razones:

En lo que tiene que ver con la prueba documental se allegó el documento titulado como Necropsia N° 10⁵, en donde se advierte de las circunstancias de la muerte del señor GÓMEZ PÉREZ, manifestando

5 Folios 25 a 27 de la demanda

que *“los hechos ocurrieron el día 16 de Marzo de 2011, hora sin establecerse en el lugar de trabajo del fallecido llamado mina de carbón.”* y más adelante se expone que *“no hay versiones de testigos”*.

Se allegó también la constancia de la Fiscal 65 Seccional de Amagá Antioquia⁶, Dra. MARÍA ELENA MEDINA ESTRADA, delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de Amagá y Titiribí, la cual indicó que el lugar de ocurrencia de la muerte del señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ fue la mina “La Comuna”, ubicada en la Ferrería Amagá, sitio de trabajo del occiso.

Por otra parte, se allegó un listado de propietarios de minas con sus respectivos nombres, documento que en su pie de página indica *“Elaborado por: Servicio Geológico Colombiano Easma, Secretaría de Minas de Antioquia y la Alcaldía de Amagá”*⁷, en donde aparece la mina “La Comuna” como perteneciendo al señor PORFIRIO ORTEGA, la cual está ubicada en la Ferrería la Cancha; no obstante, no se establece la antigüedad, el número de trabajadores, sus nombres, su fechas de ingreso, producción ni mantos explotados, etc.

Se allegó también un documento elevado por una asesora técnica desconociéndose a qué entidad pertenece, el cual va dirigido a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, solicitando la legalización de minería de hecho, en donde figuran varios nombres de propietarios, entre los que se encuentra PORFIRIO ORTEGA de la mina La Comuna, el señor RUBÉN DARÍO VÉLEZ de la mina Carbones La Cancha y la señora ASTRID YANETH PUERTA de la mina La Ferrería.

Y, por último, se anexó una declaración extra-proceso⁸ efectuada por el mismo causante ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ el 6 de noviembre de 2010, en donde señala que *“conozco de forma personal y directa al señor PORFIRIO DE JESÚS ORTEGA ARROYAVE, desde hace más de 12 años*

6 Folio 31 de la demanda

7 Folio 32 de la demanda

8 Folios 23 a 24 de la demanda

trabajo con dicho señor en la mina La Comuna ubicada en la Vereda La Ferrería del municipio de Amagá".

De estas pruebas documentales se puede desprender en principio que el señor ROMÁN GÓMEZ PÉREZ falleció al parecer en la mina la Comuna, tal y como lo establece la constancia de la Fiscal 65 Seccional de Amagá Antioquia, de la que el supuesto dueño era o es el señor PORFIRIO ORTEGA, sin embargo, por si sola esta prueba documental no da la suficiente claridad para tener certeza de la verdadera relación laboral existente entre las partes, y más aún cuando no se logran determinar otros aspectos esenciales para la declaración del contrato de trabajo como son: si efectivamente el señor GÓMEZ PÉREZ laboró desde el 2 de enero de 1996 como se pretende en la demanda, cuál era su horario de trabajo, si devengaba salario y cuál era su cuantía, si estaba bajo la subordinación del aparente dueño de la mina o si ésta era explotada por otra persona, si laboró de forma ininterrumpida, etc.

Por otro lado, en cuanto a la testimonial, se recibió la declaración del señor FRANCISCO JAVIER ARREDONDO, el cual conoció al fallecido ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ debido a que es el esposo de su tía quien aquí funge como codemandante, manifestando que no trabajó directamente con el señor GÓMEZ PÉREZ en la misma mina, pero que sabía que éste había laborado para PORFIRIO ORTEGA porque el mismo ROMÁN ANTONIO GÓMEZ así se lo había comentado, explicándole a su vez las labores que realizaba de quemador y barretero en la mina que, según creía, se llamaba "La Cancha" cambiando posteriormente el nombre a "La Comuna"; expuso que tan solo fue en dos ocasiones a esa mina donde laboraba el causante, pero únicamente estuvo por fuera, y reiteró que se enteraba de la labor desempeñada por el señor ROMAN GÓMEZ PÉREZ, así como de quién era su jefe, debido a que el mismo causante se lo contaba. También precisó que no conoce quien es la señora OMAIRA PÉREZ AGUDELO.

El testigo ROQUE ANTONIO SERNA BEDOYA, amigo de ROMÁN GÓMEZ PÉREZ, al cual conoció debido a que le gustaban los gallos, expuso que el causante laboró en la mina La Comuna, de la cual era dueño el señor PORFIRIO ORTEGA, no obstante, indicó que él nunca llegó a trabajar allá, pero que sabía que el dueño era PORFIRIO porque conocía a los hermanos de éste a quienes también les gustaban los gallos; manifestó que el señor ROMÁN GÓMEZ laboró más o menos durante 16 años en dicha mina; expresó que sabe las actividades del señor ROMÁN GÓMEZ debido a que él le comentaba que le tocaba ser barretero y quemador; en lo que se refiere al salario devengado, indicó que el señor GÓMEZ PÉREZ le comentaba cómo le iba y que se podía hacer entre 400 y hasta 500 mil pesos, y que era PORFIRIO ORTEGA quien le pagaba; por último señaló que no conoce a la señora OMAIRA PÉREZ AGUDELO.

Conforme a la prueba testimonial y a los hechos relevantes que nos interesan, claramente para la Sala, estos testigos se pueden catalogar como de oídas por proporcionar versiones que les relataba el señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, pues no tienen conocimiento directo de lo sucedido en la supuesta relación laboral que hoy se persigue, si bien expresan que el dueño de la mina era el señor PORFIRIO ORTEGA, y que era éste quien supuestamente le pagaba, no dieron certeza de fechas de la relación laboral, como tampoco conocen de primera mano los valores de la remuneración ni de la forma de pago, suponen que el causante si prestaba personalmente su servicio, ignoran si existieron llamados de atención o de cómo se efectuaba la labor, entre muchos otros aspectos, lo que sin lugar a dudas revela el desconocimiento de la fuente en la que basan su conocimiento de todo lo manifestado, pues como se logró observar nunca fueron compañeros directos del señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ, y claramente no hay razón de sus dichos, por lo que para la Sala gozan de poca convicción y certeza.

De igual forma, debe señalar la Sala, que las respuestas del señor FRANCISCO JAVIER ARREDONDO deben ser analizadas de una manera más detallada, ya que provienen de una persona que, si bien no tiene

interés directo en las resultas del proceso, goza de un grado de parentesco con todas las demandantes y, además, se repite, sus respuestas surgieron de las conversaciones que sostenía con el señor propio ROMÁN GÓMEZ PÉREZ; al igual que lo señala el juez, también presenta contradicciones en el elemento de la remuneración, pues indica que al señor GÓMEZ PÉREZ le pagaban al contrato, es decir, lo que a bien tuviere hacer en la mina pues podía irse en cualquier horario, mientras que el otro testigo, el señor ROQUE SERNA afirma que el causante debía cumplir un horario de trabajo de 5:30 de la mañana hasta las 4:30 o 5:00 de la tarde.

Causa extrañeza para la Sala, que los dos testigos afirmen que, en la labor de la minería, siempre se les cancela la seguridad social, que, si no se hacía no podían entrar a la mina, y expresan además que al demandante le “sacaban” la plata para el pago, no obstante, en la historia laboral, no existe una sola cotización que otorgue por lo menos un indicio de que el señor ROMÁN GÓMEZ PÉREZ ejercía las labores de la minería bajo la subordinación de los demandados, y más cuando para el 2 de enero de 1996, ya existía cobertura en Seguridad Social en el municipio de Amagá.

Después de efectuado el análisis anterior, esta Sala advierte, no obstante, que no existe prueba que refute que el señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ falleció en la mina “La Comuna” como lo referenció la Fiscal Seccional de Amagá, la cual además expuso que este era el sitio de trabajo, sin embargo, debe recordarse que conforme a las cargas probatorias, la parte demandante debe demostrar además de la prestación personal del servicio y el salario, los extremos temporales de la relación laboral, tal y como lo indica la Corte Suprema de Justicia en sentencia de vieja data con radicado 42167 de 2012, en donde consagra que:

“... la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código

*Sustantivo del Trabajo, **no releva al demandante de otras cargas probatorias**, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos trascendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, **como por ejemplo los extremos temporales** de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros.” (Negrilla de la Sala)*

Es por todo lo anterior, que la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA** en este sentido.

Pensión de sobrevivientes

En lo que respecta a la pensión de sobrevivientes solicitada a cargo de COLPENSIONES, si bien fue muy diligente el juez al analizar esta prestación económica diferenciando las figuras de la omisión en las cotizaciones y omisión en la afiliación, como ya se dijo en el acápite anterior, no se logró probar la relación laboral regida por un contrato de trabajo entre el causante y los demandados, por lo que no habría lugar a ningún pago por cálculo actuarial a favor de COLPENSIONES como se solicita en la demanda.

No sobra aclarar que la muerte del señor ROMÁN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ fue el resultado de un accidente ejerciendo actividades como minero, según lo determinó la Fiscal Seccional de Amagá y como lo establece la necropsia en donde se indica que “*fue consecuencia natural y directa de SHOCK CARDIOGENICO Y ANTRACOSIS PULMONAR ocasionado por descarga eléctrica mientras laboraba en mina de carbón*”, por lo que a la que le correspondería, en principio, responder en caso de probarse el origen laboral u ocupacional de la muerte, sería a la Administradora de Riesgos Laborales -ARL- en caso de existir afiliación, o ante la falta de ésta, el responsable de asumir las cargas prestacionales sería el empleador, sin embargo, esto no fue una pretensión de la demanda, puesto que lo que se pretendió fue el reconocimiento y pago de un cálculo actuarial a cargo del aparente

empleador omiso para que fuera recaudado por COLPENSIONES y esta a su vez reconocer la pensión de sobrevivientes, lo que no puede darse como ya se explicó. Por lo dicho, no habrá otro pronunciamiento al respecto, debiéndose en este sentido **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia en todas sus partes.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 12 de julio de 2022.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dd92cfb8dc0ead958a4eebcbfd6a28bddf773243c077073d82bd8587f1fa5cb6**

Documento generado en 26/05/2023 01:23:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>